

JUEVES 1.º JULIO
1852.

SE SUSCRIBE

En Madrid en las oficinas de EL DIARIO ESPAÑOL, calle del Carmen, núm. 32, y en las librerías de Monier, Carrera de San Gerónimo; Cuesta, calle Mayor; Villa, plazuela de Sto. Domingo, y Oliveres, calle de la Concepción Gerónima, núm. 13.

PRECIO DE SUSCRICION.

Un mes. 12 rs.
Tres meses. 36

EL DIARIO ESPAÑOL,

POLITICO Y LITERARIO.

JUEVES 1.º JULIO
1852.

SE SUSCRIBE

en provincias en las principales librerías, y administraciones de correos y por medio de librerías, francas de porte, á la orden del administrador de EL DIARIO ESPAÑOL. En París, en la librería Española, rue de Provence, núm. 12.

PRECIO DE SUSCRICION.

Provincias. 20 rs.
Tres idem. 60
Estranjero. 24
Tres idem. 72
Ultramar. 30



El Orden de ayer dedica un largo artículo á refulgar el que publicamos el sábado último en la polémica que teníamos pendiente sobre la deuda flotante. Como el periódico ministerial no añade nuevas razones, y por el contrario, viene implícitamente á confirmar algunas de las que espusimos, nuestra contestación será muy breve.

El Orden nos hace el cargo de inmodestos, porque, según él dice, suponemos que para dar solución á nuestros argumentos, necesita consultar la sabiduría de las altas dependencias del estado. El cargo no es exacto. En todas las cuestiones económicas que hemos abordado, el Orden siempre nos ha tratado de inespertos, de poco inteligentes, de poco entendidos, ostentando por su parte un tono de superioridad que hemos apreciado en su justo valor. Ahora bien. Nosotros discurramos de la manera siguiente: Los redactores del Orden, como tales redactores, no gozan el derecho, sin incurrir en la nota de ridículamente jaclanciosos, de significar que se estiman en mas que los redactores de otro periódico cualquiera; es así que cuando discuten, sobre materias de hacienda especialmente, se tienen por mas sabios, por mas prácticos, por mas técnicos que sus demas colegas; luego les coje de lleno la nota arriba enunciativa, ó tienen que confesar que no es á su mayor sabiduría, á su mayor ciencia, á sus mayores conocimientos, á los que se refieren cuando *ex tripode* declaran la incompetencia de los demas, sino á la ciencia, sabiduría y conocimientos de algun Dios incógnito que, si no está en las oficinas públicas, estará en otra parte. Por lo demas, era preciso que nosotros estuviésemos dotados de una dosis de amor propio, que afortunadamente nos falta, para creer que nuestros pobres artículos pudieran traer á mal traer á las oficinas del estado. ¿Qué impresión pueden hacer en las vastísimas capacidades de los altos funcionarios que las dirigen, las tristes raposidades de un menguado periodista de la oposición? ¿Cómo podrían empecer el incontestable edificio de la ciencia y saber, los proyectiles de espuma que desde nuestras endeble baterías les lanzamos? Y si pudiera acerca de esto cabernos duda alguna, no nos espondríamos á que se abrieran las páginas del *Diario de las Cortes* y quedase aplastada nuestra rebelde incredulidad bajo el peso de esos modelos de elocuencia y ciencia que han salido de sus labios. ¿Las oficinas del estado! Pues qué, ¿si las oficinas del estado se encargaran de contestar á nuestros artículos, habrían de necesitar seis y ocho días para organizar la contestación?

Acercas de la publicidad, tiempo vendrá, si Dios quiere, en que manifestemos por completo lo que pensamos. Porque el Orden debe tener entendido que solo pecamos de inmodestos en creer que las cosas que llamamos ahora son mejores, mucho mejores, incomparablemente mejores, infinitamente mejores que las que decimos; y como sería una lástima que nos lleváramos á la tumba esos tesoros, que nos empeñamos en tener encerrados, la Providencia castigará algun día nuestra avaricia, obligándonos á convertirlos en comun patrimonio.

En cuanto al fondo de la cuestión, nuestros argumentos han sido concluyentes.

El Orden dijo:

Por presupuestos que rigieron hasta fines de 49, se han pagado en 1850 ciento cuarenta y cuatro millones.

Nosotros hemos añadido:

Por presupuestos que han regido hasta fines de 1849 se han cobrado en 1850 ciento sesenta y cinco millones.

El Orden no contradice nuestra asercion.

El Orden dijo:

Verdadero corte de cuentas fué el del año de 1828, en que se mandó que todos los créditos atrasados del tesoro por el personal y material se pagasen en papel del estado.

Nosotros hemos dicho, apoyados en la autoridad del Orden:

Verdadero corte de cuentas ha sido el decretado hasta el año de 1849 sobre el material, y hasta el 1852 sobre el personal, en 18 de agosto de 1851 y en 18 de diciembre del mismo año respectivamente, mandando que en equivalencia de los créditos se espidiese papel del estado sin interés respecto á los muchísimos millones procedentes de la deuda del personal, y con interés respecto á los procedentes de la deuda del material.

El Orden dice:

Que esos cortes de cuentas no se parecen al de 1828, supuesto que entonces se llamó á los créditos atrasados á convertirse en deuda sin interés, y como que esta, según su nombre lo indica, no gozaba de opción á dividendos, y como nunca se pensó seriamente en su amortización, no sirvió de gravamen á ningún presupuesto posterior. Al contrario, el arreglo de las deudas del personal y del material ordenados en 1851 y 1852, determinan la suma que en cada presupuesto se ha de destinar para su sucesivo reembolso. Por eso no consideramos que constituyen verdadero corte de cuentas.

El cargo que aquí se fulmina contra una persona tan respetable, tan concienzuda y de una reputación tan solidamente establecida, como ministro organizador de la hacienda pública, y fiel cumplidor de sus compromisos en aquella época, es de una temeridad que asusta: decir que el señor D. Luis Lopez Ballesteros nunca pensó seriamente en la amortización de la deuda sin interés que creó

para pagar los atrasos del tesoro hasta el año de 1828, es lo mismo que decir que ofreció una cosa sin ánimo de llevarla á efecto; es lo mismo que acusar al gobierno de 1828, que con tanta religiosidad cubrió sus atenciones, de falaz á ciencia cierta y á sabiendas en sus promesas; es lo mismo que decir que el designio secreto, pero verdadero, de los que en 1828 arreglaron la deuda del material y del personal, fué cometer una inicua espoliación; es lo mismo que...

Nada hay tan peligroso como la necesidad de defender causas desesperadas.

Por último, de que en 1850 y 1851 se paguen atrasos anteriores á 1849, no se sigue que en agosto y diciembre de 1851 no se haya hecho, según la definición del Orden, un verdadero corte de cuentas; es decir, que se haya acordado la expedición de papel del estado en equivalencia de los atrasos del tesoro procedentes del personal y del material desde 1.º de mayo de 1828 hasta fines de diciembre de 1849 y 1852 respectivamente. Si, á pesar de lo que previenen la ley de 18 de agosto de 1851 cortando la cuenta del material, y el decreto de 18 de diciembre de 1851 haciendo lo mismo con la del personal, se han amortizado en metálico cantidades que deben satisfacerse en papel, este será un nuevo cargo que dirigirá contra los que han acordado su pago indebido.

Propondremos á nuestro colega un dilema, al cual mucho estimaríamos que se dignase contestarnos. El dilema es el siguiente:

O las cantidades pagadas en metálico en 1850 y 1851 por atrasos hasta fines de 1849, estaban respectivamente comprendidas en la ley y el decreto que arreglaron las deudas del material y del personal, ó no lo estaban. Si no estaban comprendidas, nos hallamos fuera de la cuestión. Si lo estaban, no pudieron pagarse en metálico. Si se pagaron, el ministro que acordó su pago quebrantó la ley y el decreto que lo prohíben. Cargo gravísimo, mas grave aun que el del corte de cuentas.

VAPORES ATLANTICOS.

Está tan demostrada la ventaja de las comunicaciones marítimas de vapor para toda nación que tiene que cumplir los deberes indispensables de facilitar á su comercio los medios de multiplicar las operaciones abreviando la distancia y el tiempo de los avisos y trasportes, y de levantar su influencia política al nivel de su aptitud industrial y mercantil, que sería superfluo el trabajo de inculcar una verdad tan común. Si nos faltase la teoría de la utilidad creada por la aplicación de este poderoso elemento de riqueza nacional, nos bastaría señalar el resultado que sacaron de su experiencia la Inglaterra y los Estados-Unidos, y el calor con que casi todas las naciones marítimas de Europa se disponen á aprovecharse de esa experiencia para convencer de que nuestra nación es la que con mas fé y bajo mejores auspicios debe alistarse en tan gloriosa como pacífica rivalidad. No hay en España un solo hombre medianamente conocedor del interés público, que no considere al establecimiento de una comunicación frecuente entre nuestros puertos y América, como una de las necesidades mas apremiantes del día. Y no porque tengamos dos de las mejores Antillas, y en ellas un activo comercio y una población cuya simpatía y respeto nos conviene conservar; que aunque en ningún punto de América existiese ya nuestro dominio, aunque la creciente población del continente que se extiende desde Méjico hasta la Tierra del Fuego no hablase nuestra lengua, y no brindase con la preferencia de sus mercados á nuestra navegación y comercio, la situación que en Europa ocupamos, dotada de las condiciones mas privilegiadas de una potencia naval y tan adelantada sobre el Océano, nos impondría la obligación de ser los principales agentes de la correspondencia entre Europa y aquellas vastas regiones.

El que solo de la conveniencia de nuestras colonias y del comercio de la metrópoli con ellas dedujese la importancia de una línea española de vapores trasatlánticos, reduciría á muy pequeños límites una empresa que no lo tiene para el engrandecimiento de la nación y de su comercio. Grande como debe ser el provecho que derivan aquellas islas de la mayor frecuencia y regularidad de sus relaciones con nosotros, provecho que no negamos merecer mucha atención, no iguala, ni con mucho, al valor moral y á la utilidad positiva que nos grangearía el ser los conductores de la correspondencia entre todas las naciones del Mediterráneo y el comercio de nuestra raza en América. Pero no es hoy nuestro propósito entrar en este género de consideraciones, á las cuales hemos dedicado ya un artículo hace algunos días. Cercana la época en que debe cesar el experimento hecho por el gobierno para encargar á una empresa mercantil nuestra comunicación por vapor con América, procuraremos exponer nuestra opinion acerca de las condiciones principales que deberá reunir la empresa, si ha de cumplir bien las obligaciones del servicio. Declaramos ante todo que no es aislado nuestro voto, y que para determinarlo hemos consultado escrupulosamente el que en general prevalece sobre esta materia. Ninguna misión puede ser

mas obligatoria para la prensa que la de manifestar franca y lealmente el deseo público, á fin de allanar los inconvenientes y disipar los escrúpulos que suelen entorpecer la acción del gobierno en asuntos de tanta responsabilidad administrativa.

La dirección de la línea, la frecuencia de los viajes, el número y calidad de los vapores, y las obligaciones reciprocas del gobierno y de la empresa, serán los objetos á que habremos de contraer nuestro examen.

La mayor importancia de las relaciones existentes es la que en todas partes determina la dirección de las líneas de vapores trasatlánticos. Es claro, según esto, que los puntos entre los cuales deben correr los vapores españoles son nuestros puertos meridionales y las Antillas. Cádiz y la Habana están naturalmente designados como los dos extremos de la línea principal ó oceánica; el primero, situado á la entrada del Mediterráneo, y el otro á la del golfo mejicano y el mar de las Antillas, brindando cómodo recalado y ventajas de depósito á la rica navegación de aquellos grandes mares. Los vapores de esta línea, para hacer la travesía con la celeridad que exigen las relaciones de nuestro comercio y la competencia de las líneas extranjeras, deberían correr sin otra escala que la de Puerto-Rico, dejando el servicio entre las Canarias y la península á otra empresa, que mas ó menos subvencionada debe subsistir con nuestro comercio en aquellas islas y con los recursos que le proporcionen las líneas inglesas que sirven á la costa occidental de Africa y al Brasil y al río de la Plata. Ni la calidad ni el valor de las relaciones del grupo de las Canarias con América, ni razón alguna de utilidad política para España indican, á nuestro modo de ver, la oportunidad de sacrificarles una de las condiciones mas esenciales de la línea oceánica, cual es la celeridad de la travesía por el derrotero mas recto al ir, y por las mejores corrientes de agua y aire al volver.

Pero la línea principal, sin una prolongación en Europa hasta uno de los puertos del Mediterráneo en que converje el servicio extranjero, y sin dos prolongaciones en América; una hasta Veracruz en Méjico, y otra hasta Chagres y San Juan en la América del Centro, quedaria privada de los grandes recursos que para su prospera existencia le ofrece el gran movimiento comercial y de viajeros que tan maravillosamente crece en aquellos puntos, ó bien tardaría que someterse á una dependencia precaria del servicio extranjero, sujeto á las variaciones que puede introducir en él cualquiera combinación de utilidad propia ó cualquier capricho de rivalidad en los países que le prestan. Es, pues, indispensable que la empresa española haga con sus propios barcos el servicio de las prolongaciones señaladas, condicion que consideramos como una de las mas inevitables que debe tener presente el gobierno al tratar de la adjudicación á una empresa particular. Las ganancias fabulosas realizadas por el hormiguero de vapores que corren entre los Estados-Unidos y la América central, y la misma combinación de servicio que acaba de hacer la compañía de la Mala Real Inglesa de las Antillas para aprovecharse mejor del movimiento del Panamá, Nicaragua y Méjico, son la síntesis mas clara de todos los argumentos que nos imponen la obligación de utilizar en nuestros propios barcos este movimiento, aumentado á cada hora por los pueblos de nuestra raza, que deslumbrados por la actividad y la riqueza de las empresas extranjeras, buscan en vano en las de los nuestros una prueba siquiera mediana con que justificar el orgulloso y emprendedor espíritu de sus abuelos. Repetimos que el gobierno, en fuerza del nuevo carácter que van tomando nuestras relaciones con América, y del trastorno que luego experimentarán las de nuestras posesiones de Asia, cuya correspondencia con la península tomará dentro de poco tiempo la dirección de Panamá y Cuba por el Pacífico, debe conceder la mas delicada importancia á la condición de las prolongaciones.

Demostrado como está el valor de nuestras relaciones políticas y comerciales con América, es superfluo ponderar la conveniencia de que sean frecuentes los viajes de los vapores españoles. Nada sobraría de uno semanal en todas las líneas; pero considerando el carácter y la suma de nuestros capitales, y su escasa experiencia en este género de inversiones, deberíamos contentarnos por ahora con dos viajes al mes en la línea principal y en la de Veracruz. En la de Chagres y San Juan sería quizá necesario un viaje semanal, ó por lo menos tres cada mes, á fin de sacar todo el partido que ofrece el continuo tránsito de los istmos. Para la prolongación de Europa, en donde hay ya establecida una línea española, bastaría quizá cuidar de que la llegada á Cádiz de las correspondencias del Mediterráneo coincidiese exactamente con la salida periódica de los vapores trasatlánticos; sin embargo de que los viajes mas frecuentes, aunque hubiesen de sostenerse con mayor subvención del erario, remunerarían el sacrificio atrayendo á nuestros puertos los pasajeros, que de otro modo aguardarían é incurrirían en los gastos de detención en puertos extranjeros.

El número y la calidad de los vapores, son dos cuestiones resueltas en la viva discusión que sobre una y otra se ha abierto últimamente en Europa. Las líneas que ya existen y las que van á establecerse entre los puertos principales de Europa y América, se apoderarán de los pasajeros y las mercancías, hasta en algunos de nuestros puertos. La española no solo debe igualar y aun superar á las que están ya en servicio, reuniendo las condiciones de fuerza, celeridad, de puntualidad en las salidas y llegadas, de cabida para los pasajeros y fletes; y de orden y abundancia en el mecanismo interior de los buques, sino que tambien debe precaverse contra la competencia eventual de las mejoras que probablemente adoptarán las que están en proyecto y en via de ejecución, alguna de las cuales ha de correr en las mismas aguas de la nuestra. Lo mejor del tráfico y del tránsito del Mediterráneo recaerá en la empresa que por su mas perfecto servicio se acredite en la confianza de los gobiernos y en la predilección de los pasajeros y del comercio. Se ve, pues, que la empresa española deberá aplicar al servicio de la línea principal entre Cádiz y la Habana, cinco grandes vapores de nueva construcción, iguales á los mejores de las líneas inglesas y americanas; uno á la prolongación de Méjico, inferior en fuerza y capacidad; dos de esta misma clase á la línea de la América del Centro; y otros dos para la del Mediterráneo, que habrá de terminar en Marsella. Para las tres prolongaciones podrían servir los cuatro vapores que emplea el gobierno en el servicio de la correspondencia de América.

Nos falta ahora decir algunas palabras acerca de las mutuas obligaciones del gobierno y de la empresa que pueda formarse. La opinion pública se ha manifestado uniformemente contra la clase de subvención que hasta ahora han pedido nuestras empresas de correos atlánticos. La asignación por parte del gobierno del importe de la correspondencia de Ultramar, del transporte de los soldados y empleados y de otros valores por el estilo, son condiciones que, en nuestra opinion, no pueden ser admitidas; hacer á un gobierno proposiciones como la asignación del importe de la correspondencia pública de una de sus provincias, con intervención en la contabilidad por parte del contratista, es tanto como llamarle incapaz de evaluar el producto ordinario de un ramo de ingresos, acusarlo de insolvente y mal pagador, y exigirle en hipoteca hasta la renuncia de sus atribuciones privativas, suponiéndolo incapaz de desempeñarlas. El gobierno, á imitación de los de Inglaterra y los Estados-Unidos, y conformándose con el sistema adoptado por el de Francia y los demas del continente, debería ofrecer una subvención en dinero, y los privilegios que en aquellos países tienen los vapores de correo, en consideración á la clase de servicio nacional en que se ocupan. De la correspondencia pública debe encargarse exclusivamente el gobierno, y hasta de su custodia á bordo de los vapores, y de su cambio en los extremos de las líneas y sus puntos de recalada; exigiendo en cambio á la empresa todas las garantías del mas puntual cumplimiento de sus obligaciones.

Es una de las mayores necesidades de nuestra situación comercial, el pronto y acertado establecimiento de este servicio. Pero los gastos que supone parece que excluyen la esperanza de que se consiga plantearlo por medio de una compañía colectiva. La anónima allanaría los inconvenientes que ofrece la reunión de tan considerable capital, poniendo á contribución el interés propio y el patriotismo de nuestros centros comerciales, y especialmente de los españoles de Ultramar.

Quisiéramos añadir algo sobre la remuneración que encuentran los gobiernos inglés y norteamericano por el desembozo considerable de la subvención que dan, en el aumento fabuloso de la correspondencia á que dá lugar la facilidad de su transporte por las líneas de vapor; pero así de este asunto como de otros inherentes á la cuestión, nos ocuparemos en otro artículo.

El Constitucional hubiera debido esperar nuestra respuesta á las insinuaciones nada benévolas que antes de ayer nos dirigía, violando gratuitamente cierto género de conveniencias muy respetables, para no incurrir en la indiscreción que ayer nos regalaba sobre el mismo asunto.

No estamos dispuestos á tolerar que se nos convierta en objeto de cierto género de bromas, y aun que jamás imitemos la táctica de oposición que con tanta habilidad intenta nuestro colega en estos momentos, no somos tan ignorantes de lo que pasa en Madrid, que no sepamos que sobran en mas de un caso motivos suficientes para devolver por una indiscreción una verdad desagradable.

En el Correo de España insertamos una carta de nuestro corresponsal de Torreblanca, acerca del contenido de la cual debemos llamar la atención. En ella se trata de una cuestión de bastante interés para aquellos pueblos, y las razones que aduce en favor de su opinion el autor de la carta, son muy atendibles.

Según dice un periódico, se tiene como cosa segura que el gobierno, si no ha aprobado, tardará poco en aprobar el reglamento para la ejecución del plan de estudios vigente, cuya formación se encomendó no há mucho á una comisión, de la cual dimos oportuna noticia, compuesta de personas muy competentes.

Al mismo tiempo, añade el mismo periódico, creemos muy cercano el día en que dé por concluidas sus tareas la comisión que ha de proponer al gobierno las bases de una ley relativa á los estudios superiores.

El Comercio de Cádiz publica en su número del 27 su 7.º artículo sobre reformas políticas, que dice así:

«La discusión de las leyes en el parlamento, está sujeta entre nosotros á tales trámites, que la simple enunciaci6n de ellos basta para espalar por qué han sido hasta ahora tan estériles é infrecuentes las discusiones legislativas de nuestras Cortes.

Luego que el gobierno, despues de maduras deliberaciones en los altos cuerpos consultivos del estado y en el consejo de ministros, se decide á formular un proyecto de ley, necesita presentarlo para su examen y aprobacion en el senado ó en el congreso.

Lo primero que se hace entonces es pasarlo á las secciones, donde se discute brevemente antes de nombrar los individuos que han de constituir la comisi6n parlamentaria encargada de dar su dictamen sobre él.

La comisi6n una vez nombrada, abre una discusi6n estensa acerca de la totalidad y de los artículos del proyecto, y si este es de alguna importancia, suelen concurrir y tomar parte en los debates gran número de diputados ó senadores estranjos á la comisi6n misma, constituyéndose en el seno de ella una especie de congreso, al que no falta mas que la tribuna pública para reunir todas las condiciones de tal.

Como la comisi6n no tiene un plazo fijo dentro del cual necesite dar por concluidos sus trabajos, hay ocasiones en que se prolongan estos meses y meses, y en que llega á cerrarse la legislatura sin que el proyecto haya sido despachado.

Pero se presenta al fin el dictamen, y como las mas de las veces no es acordado por unanimidad, suede que al lado del proyecto de la mayoría hay uno ó mas votos particulares, que son otros tantos proyectos de los individuos de la comisi6n que han quedado en minoría.

Viene luego la discusi6n pública en el cuerpo colegislador á que la comisi6n corresponde. Se empieza por los votos particulares, y al tratar de ellos se discute toda la ley. Cuando han sido desechados, los sigue el dictamen de la mayoría, y vuelve á proponerse exactamente la misma discusi6n. Se aprueba la totalidad y hay que discutir entonces, artículo por artículo, todos los que el proyecto contiene, con mas las enmiendas, pocas ó muchas, que sobre cada uno de ellos se presentan. Terminada la discusi6n del último artículo y de la última enmienda, pone fin á tan improbas tareas la votaci6n definitiva de la ley.

Pero todavia no se ha recorrido sino la mitad ó la tercera parte del camino. La ley va entonces al otro cuerpo colegislador, y en él pasa por los mismos trámites, y sufre ó puede sufrir las mismas dilaciones; porque hay ó puede haber la misma discusi6n en las secciones, los mismos debates en la comisi6n, los mismos votos particulares, la misma discusi6n pública sobre la totalidad, sobre los artículos y sobre las enmiendas, y en fin, la misma votaci6n definitiva.

Y si el senado y el congreso no están de acuerdo, es necesario proceder al nombramiento de una comisi6n mista; y la comisi6n discute de nuevo la cuestión ó cuestiones en que ha habido el disentiimiento, y sobre su dictamen se abre tambien discusi6n en todos los dos cuerpos legislativos, y hasta que ha sido por ellos aprobado no puede decirse que la ley está suficientemente discutida, y no puede, por tanto, elevarse hasta entonces á la sanción de la corona.

Ahora bien, nosotros preguntamos á todos los hombres imparciales y desapasionados: ¿es posible hacer leyes de esta manera? La prueba de que no es posible hacerlas es que no se hacen ó se hacen mal: que pasan legislaturas enteras sin que puedan discutirse los presupuestos, y que toda ley algun tanto estensa se vota por medio de una autorizaci6n, en la cual va envuelta hasta cierto punto la abdicaci6n de los derechos del parlamento. Sucede tambien que cuando una ley ha pasado tantos trámites, cuando ha sufrido tantas impugnaciones, cuando se la ha sometido á discusiones tan repetidas, nace muerta, porque nace desacreditada, sin ascendente moral sobre la opinion pública. De aqui que el gobierno, para poder gobernar, necesite ejercer una gran influencia en las deliberaciones de las cámaras, las cuales vienen á ser meros instrumentos de la voluntad de los ministros, porque si de tal tutela se emancipasen no habria gabinete posible, ni se harían leyes, ni las discusiones parlamentarias darian otro resultado que establecer como un hecho preciso la negaci6n de toda idea de gobierno.

Abreviar, simplificar los trámites á que está sujeta la discusi6n de las leyes es, por una parte, devolver al parlamento su acci6n legítima sobre el gobierno del país, y alejar, por otra, los obstáculos que hoy se oponen á que las cámaras puedan funcionar libremente dentro de la órbita de sus atribuciones, con independencia del poder ejecutivo, el cual renunciará, de seguro, á querer dominarlas cuando esto no lo sea absolutamente necesario para gobernar.

Pero ¿qué modo podrá abreviarse y simplificarse la discusi6n de las leyes? Siguiendo el órden que hemos adoptado en estos artículos, tócanos ahora, despues de haber indicado el mal, proponer inmediatamente el remedio.

Nosotros reformaríamos, en esta parte, los reglamentos de las cámaras, estableciendo para las discusiones legislativas los trámites siguientes:

1.º Presentado un proyecto de ley á cualquiera de los cuerpos colegisladores, el presidente señalaría desde luego el día en que hubiera de discutirse.

2.º Esta discusi6n, en la cual no podrian tomar parte mas que tres oradores en pró y tres en contra, tendria por objeto aprobar la ley en su totalidad ó desecharla.

3.º Una vez aprobada, pasaría á las secciones para nombrar la comisi6n, la cual sería naturalmente el eco fiel de la mayoría, porque se nombraba despues de haberse dado á conocer las ideas de cada fracci6n parlamentaria, en la discusi6n pública de la ley.

4.º El presidente señalaría á la comisi6n un plazo para dar por concluidos sus trabajos, y si pasado aquel no presentaba su dictamen, se entendería que aprobaba el proyecto segun habia sido presentado.

5.º El trabajo de la comisi6n sería discutir los artículos de la ley y proponer en ellos todas las innovaciones que juzgase convenientes.

6.º Terminadas sus tareas, presentaría el dictamen acompaÑado de él la nueva redacci6n que hubiese dado al proyecto. La minoría, si no hubiese unanimidad, podria proponer, sin formular un proyecto distinto, las enmiendas que estimase oportunas en los artículos de la ley. Todos los diputados ó senadores tendrían igualmente derecho á proponer enmiendas.

7.º Dada cuenta á la cámara del dictamen de la comisi6n, se procedería á discutir las enmiendas, si las habia, y concluida esta discusi6n, ó sin ella, en el

caso de que no se hubiese presentado ninguna enmienda, se votaría definitivamente la ley por bolas blancas y negras.

Los mismos trámites deberían seguirse en el otro cuerpo colegislador, nombrándose como ahora la comisión mixta, cuando hubiese disenso.

La discusión sería pública en el senado y en el congreso, y reservada en las secciones y en la comisión.

En la discusión de los presupuestos, el correspondiente a cada ministerio y el de ingresos serían considerados como leyes diversas para los efectos de esta reforma, sin perjuicio de discutirse primero el conjunto de todos ellos; pero quedarían fuera de discusión los de la casa real, de la deuda pública, de las clases pasivas, del culto y clero, de las cargas de justicia, y demás gastos en que hubiese derechos adquiridos independientes de la ley de presupuestos.

Este es, brevemente, el compendio de nuestro sistema. Una discusión pública entre muchos para la totalidad de las leyes: una discusión reservada entre pocos para los artículos: un plazo fijo dentro del cual hubiese de quedar discutida cada ley: una discusión especial para las enmiendas, o lo que es lo mismo, para los artículos cuestionables, y por remate de la obra, la votación definitiva. Queremos, pues, discusión, pero no un exceso de discusión. Queremos la discusión que ilustra, que enseña, que perfecciona el objeto discutido: no la que confunde las ideas, y hace perder el tiempo, y esteriliza las mas improbas tareas.

No falta espacio para continuar hoy nuestro trabajo.

Leemos en la Gaceta de ayer:

«Antes de ayer lunes a las nueve y media de la noche, la reina nuestra señora, acompañada del señor marqués de Miraflores, primer secretario del despacho de estado, y de la real servidumbre, se dignó recibir, en audiencia privada, al señor marqués D. Antonio Riazor Sforza, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario nombrado por S. M. el rey de las Dos-Sicilias en esta corte, el cual, habiendo sido previamente anunciado por el introducido de embajadores, al poner en las reales manos de S. M. las cartas credenciales, pronunció el siguiente discurso.

«Señora: S. M. el rey mi augusto amo, apreciando vivamente los vínculos de parentesco con V. M., y deseando conservar la buena inteligencia que felizmente existe entre los dos gobiernos, después de la partida de mi predecesor, se ha dignado nombrarme en calidad de su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de V. M., para que espese todos los sentimientos de estimación, de amistad y de sincero afecto hacia vuestra real persona, y los votos que hace por la larga conservación de V. M., por la dicha de la real familia y por la prosperidad de la monarquía.

Lo que tengo la honra de elevar a V. M. de parte de mi soberano es leal y sincero. Réstame solo esperar, señora, que al llenar mis funciones, siempre conciliadora para los dos gobiernos, pueda llegar a hacerme digno de la estimación y de la benevolencia de V. M.»

Y S. M. se sirvió contestar:

«Sr. ministro: Recibo con mucho gusto las cartas de S. M. el rey de las Dos-Sicilias que os acreditan en calidad de su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de mi persona, y como una nueva prueba de afecto, propia de los vínculos de parentesco que nos unen y de las amistosas relaciones que median entre ambas coronas. Nada omitiré por mi parte para la conservación de esta buena inteligencia, cumpliendo de este modo un deseo sincero de mi corazón y un deber de buena correspondencia para con vuestro soberano, en cuya felicidad y la de su real familia me intereso sobremanera.

No dudo que vuestras distinguidas prendas personales, señor marqués, contribuirán a mantener las estrechas y cordiales relaciones que hoy existen entre las dos cortes; y deseo que vuestra larga permanencia en la mia os persuada cada día mas de lo grato que me es la misión que os ha sido confiada.»

En la parte oficial publicamos tres decretos importantes que publica la Gaceta de ayer. El primero declarando libres de derechos y arbitrios a las verduras y hortalizas, y estableciendo nuevas reglas para los derechos sobre otras especies. El segundo mandando que el estado no dé en sus pagos a los particulares, ni reciba de ellos ni de los estanqueros, receptores y cobradores de rentas y contribuciones públicas, mayor suma en calderilla que el 20 por 100 desde la fecha de este real decreto hasta 31 de diciembre del presente año; 10 por 100 desde 1.º de enero de 1853, hasta 30 de junio del mismo año; 5 por 100 desde 1.º de julio hasta 31 de diciembre de 1853, y 3 por 100 desde 1.º de enero de 1854 hasta 30 de junio del mismo año.

Por el tercero, el cual está precedido de un largo preámbulo, queda abolida, como regla de administración de la hacienda, la facultad de establecer puestos públicos con la exclusión en la venta al por menor de las especies sujetas al impuesto de consumos, principiando a regir esta reforma desde el 1.º de enero de 1853.

EXAMEN DE LA PRENSA.

El *Heraldo* contesta a las interpeleciones que le ha dirigido el *Clamor* con ocasión de tratar sobre la inmoralidad política, manifestando que reprobaba terminantemente todo lo que el *Clamor* reprobaba, que quiere que las leyes sean una verdad, que los ciudadanos disfruten la seguridad que las leyes les conceden, niega a todo poder la facultad de usurpar las atribuciones de otro, y añade que quiere que elecciones, derechos, prerogativas, y todo lo que constituye la organización social de un país, marche pacíficamente, sin estraviarse a un lado ni a otro, por el sendero que marcan las instituciones y las leyes discutidas y aprobadas de antemano.

Pero nuestro colega moderado no comprende que quepan en el gobierno de una nación reglas absolutas, pues que en circunstancias dadas es preciso optar entre el olvido momentáneo de la legalidad y la muerte de la nación misma.

Hé aquí como concluye:

«Lo que si rechazamos con tanta energía como el *Clamor*, es que se apele a esos grandes recursos en circunstancias triviales y ordinarias, cuando no hay pretexto para interrumpir los métodos legales, y cuando al contrario todo está favorablemente dispuesto para que funcione la máquina gubernativa, para que se perfeccione lo que exista y para que se corrija lo que pida corrección, por el sendero pacífico que las leyes han trazado; y lo rechazamos por la misma razón que reprobamos el que a un simple dolor de cabeza se apliquen los mismos remedios que a una congestión cerebral: esto en el médico argüiría una peligrosa ignorancia, y en el hombre de gobierno una falta de moralidad política, que es el grave mal de que se han ocupado los periódicos en la discusión a que nos referimos.

Creemos que a poco que medite el *Clamor* lo que acabamos de manifestar, estará enteramente de acuerdo con nosotros. Ni nosotros podemos aprobar la falta de moralidad política que sin necesidad alguna y en las circunstancias comunes de la vida de

una nación, coloca el capricho en el puesto que debe ocupar la ley y le quita a esta toda su fuerza, ni el *Clamor* puede querer que las constituciones de los pueblos se funden en reglas matemáticas que espongán a todos a los mayores peligros el día en que surja de repente una excepción, por raras que estas excepciones sean. En este terreno común podemos entendernos todos, y ofrecer un culto igualmente puro a una severa legalidad, dejando al mismo tiempo el margen suficiente para aquellos escasos cataclismos que no están al alcance de la prevision humana. Para esto queremos como base indispensable la moralidad política. Si esta moralidad política no existe, inútiles serán las reglas que se establezcan en el papel, por grande que sean el ingenio, la prevision y la severidad con que se redacten.»

El *Constitucional* tambien se ocupa de contestar al *Clamor*, diciendo que reprobaba todos los excesos que este denuncia, y otros muchos que pasa en silencio, interpeleándolo a su vez de esta manera:

«Renuncia de un modo completo y absoluto la ilustrada redacción del *Clamor* a la teoría excepcional de la insurrección, que ha defendido mas ó menos emboscadamente el partido de que es órgano?

¿Así como defiende el *Clamor* en todos tiempos y circunstancias el imperio constante y absoluto de la ley, cree y sostiene igualmente que, cualquiera que sean los abusos del poder, existen siempre medios legales de combatirlo y derribarlo, cuando la justicia, la libertad y el valor se hallan arraigados hondamente en las costumbres públicas?»

El *Clamor* hace cargos al partido moderado, porque en todas las reformas siempre exige la antelación de cierto tiempo en el goce de las cualidades para que puedan ejercerse los derechos políticos, y defiende que el sistema de elecciones por provincias es preferible al de distritos.

La *Espana* se ocupa en contestar al *Clamor Público* sobre un artículo que habia publicado este último periódico acerca de la teoría de la libertad absoluta, de cuyo asunto se ha ocupado Mr. Girardin en la *Presse* de París.

El *Orden* se ocupa en contestar a nuestro artículo del sábado último, de cuyo asunto nos ocupamos en otro lugar.

La *Esperanza* contesta al *Constitucional* relativamente al régimen parlamentario puesto por el Sr. Moron, con el cual se mostró en uno de sus últimos números completamente de acuerdo. Con este motivo nuestro colega moderado supone que el diario absolutista no acepta de buena fé la doctrina del Sr. Moron, y le invita a que espongá su sistema de gobierno, a lo cual dice la *Esperanza*, que sin embargo de que ahora no debe tratarse de eso, puede anticipar que su sistema de gobierno consiste en no gobernar por sistemas concebidos *a priori*.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

La reina nuestra señora (Q. D. G.) y su augusta real familia continúan sin novedad en su importante salud en el real sitio de Aranjuez.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Exposición a S. M.

Señora: Planteadas ya las reformas recientemente introducidas en el impuesto y tarifas de derechos de puertas, con aceptación de la mayoría de las poblaciones, con buenos resultados y con esperanzas de que serán aun mejores en adelante, puede acordarse el plazo que por precaución se habia fijado para adoptar otras reformas y franquicias sobre diferentes puntos de aquel impuesto y del de consumos, con las cuales ganarán mucho la producción y el tráfico, cuya mayor libertad redundará necesariamente en progresivo acrecentamiento de las rentas públicas.

Uno de los puntos que exigen aclaración y reforma es el relativo a las cantidades de especies de consumo, que, en casos dados, se deberán considerar exentas de todo gravamen.

Justo es, señora, que se exija el pago de derechos y arbitrios correspondientes en cada pueblo a los habitantes de él, a los cosecheros, fabricantes, especuladores y trágneros de las especies gravadas, que son los que realmente hacen el abasto de ellas; pero no están en igual caso los forasteros que pasan por las poblaciones, ó se detienen en ellas a ventilar negocios, ó por recreo, los cuales llevan frecuentemente consigo cantidades mínimas, no con objeto de especular, sino para aprovecharse de ellas durante los viajes, ó a lo mas para el consumo de un día, después de haberlas tomado por lo general en donde ya han pagado derechos, algunas veces mas altos que los que de nuevo se les suelen exigir.

Otro es el que se refiere a la deducción y abono en los aforos para el pago de derechos sobre las existencias de líquidos que queden de un año para otro en los depósitos domésticos de cosecheros, fabricantes y especuladores al por mayor, y sobre las partidas que se estraigan de los mismos establecimientos con destino al consumo de pueblos distintos del reino ó del exterior.

El real decreto de 23 de mayo de 1845 concede la ventaja de un 8 por 100 por razón de mermas y derramas ordinarios sobre las cantidades de líquidos que se den al consumo de los pueblos en que se encuentren los depósitos; pero nada determina acerca de las existencias y estracciones mencionadas. Y como hay realmente mermas naturales en la cantidad total de líquidos, particularmente en los espíritus, y mucho mas en los países cálidos, es equitativo conceder algun abono por la cantidad que se evapora.

Aconseja tambien la equidad que se modere el número de seis arrobas castellanas, designado como tipo mínimo para las estracciones de especies que se pueden realizar sin pago de derechos ni arbitrios de los depósitos y de los puertos de venta al por menor con destino al consumo de otros pueblos.

Como medida de precaucion administrativa, es indispensable que las estracciones de que se trata tengan un tipo mínimo, fijo y uniforme para todas las poblaciones. El de seis arrobas no sería excesivo, atendiendo solamente al peso y volumen de las especies; pero si se considera la diferencia que hay entre unas y otras por la relación que respectivamente guardan con la población, el tráfico, el pedido, el valor y el consumo, y se reflexiona sobre la que tambien hay respecto de los líquidos por los distintos envases en que se suelen estraer, se comprenderá fácilmente que dicho tipo no es tan proporcionado como a primera vista aparece; y que el sostenimiento igual para todas las especies, produce quebrantos indebidos a los contribuyentes, pues les obliga a pagar derechos dobles en muchos casos; sirve de incentivo poderoso y constante a las ocultaciones y fraudes, con daño de los intereses legítimos de la hacienda y de la moralidad; y es en fin motivo perenne de reclamaciones y de repugnancia hacia la imposición.

Aunque la instrucción que rige para los derechos de puertas nada determina acerca de los frutos y efectos que se producen, benefician y consumen dentro del caso de las poblaciones, está en práctica exigir a estos efectos y frutos el gravamen de tarifa, verificándolo ordinariamente por medio de conciertos.

Cuando se hallaban gravadas, no solamente las sustancias alimenticias y los combustibles, como sucede en la actualidad, sino las primeras materias y productos de la industria fabril, se comprendía que abusaba hasta cierto punto semejante práctica, por mas que no estuviese muy conforme con la índole del impuesto; pero después que se eliminó de las tarifas el crecido catálogo de artículos concernientes a

primeras materias y productos de las fábricas, y que apenas quedan en los recintos interiores de las poblaciones mas que los reducidos y costosos frutos de algunas huertas y jardines, no hay buenas razones en apoyo de la conservación de un gravamen, que si bien produce al tesoro algunas utilidades, es causa constante de quejas y de disgusto para los contribuyentes.

La libertad de derechos de puertas y de toda clase de arbitrios a las hortalizas y verduras, es otra franquicia de mucha entidad que puede establecerse en favor de las capitales de provincia y puertos habilitados donde hay tales derechos.

Por no ser bien conocidos los productos que rendirían las hortalizas después que se regularizase el gravamen que sobre ellas pesaba, nivelándolo en las poblaciones de una misma escala, y por la suma dificultad de dar mas latitud a las exenciones, sin riesgo de producir un baja inconveniente en los valores calculados como ingreso del año actual, se dejó de hacer en fines del último el beneficio de que ahora se trata. Mas ya que se conoce la importancia de los rendimientos de las verduras, y la trascendencia que puede tener su franquicia, y ya que el buen resultado de las nuevas tarifas permite avanzar algun tanto en el camino de las reformas, no parece que debe retardarse la de un ramo tan principal, considerando que constituye un alimento de primera necesidad, que por la clase y número de personas que se dedican a su cultivo y beneficio, es uno de los que mas molestias y disgustos ocasionan a los introductores y a la administración de la hacienda; y que libertándolo del impuesto, a la vez que se disminuirán las operaciones de deudo y se simplificará la contabilidad, experimentarán un notable alivio los contribuyentes, con especialidad las clases pobres, que son a las que mas afecta el gravamen.

Para compensar al tesoro público en algun tanto del déficit que deben ocasionar estas exenciones, particularmente la del ramo de hortalizas, se presentan, señora, cuatro medios:

Primero. Nivelar a Madrid con las capitales de provincia de la segunda escala de la tarifa de derechos de puertas en el gravamen de un real para la hacienda sobre cada fanega de trigo, y en el de 14 maravedises sobre cada arroba de harina del mismo cereal que se introduzca para el consumo.

Segundo. Hacer igual nivelación entre las capitales y puertos habilitados que figuran en la escala tercera y las poblaciones que contribuyen por la segunda, ó sea que en vez de pagar aquellas 28 maravedises sobre fanega de grano, y 12 sobre arroba de harina, satisfagan como estas un real ó 14 maravedises respectivamente.

Tercero. Que se uniforme la administración de los derechos de puertas en los recintos interiores de algunas poblaciones que por motivos y causas especiales que ya han desaparecido, se hallan sujetos a régimen excepcional.

Cuarto. Que se haga extensivo el impuesto a Castellón, Gerona, Huesca, Lérida, Logroño, Tarragona y Teruel.

A pesar de haberse suprimido en fin de diciembre último la instrucción y tarifa especiales que regían en Madrid, y de haberse sujetado esta población a las reglas generales administrativas y a la tarifa nueva, conservó la exención de derechos que disfrutaba sobre el trigo y la harina, en consideración a la costumbre establecida de antiguo, y a que sus habitantes contribuyeron sobre la generalidad de los artículos de consumo en mas alta escala que los de las demas poblaciones.

No se le ocultó al gobierno que el mantenimiento de semejante privilegio podría dar ocasión a quejas de las otras capitales, ni que era inconveniente que un artículo de universal consumo, que sufre el gravamen del impuesto en todas las que se administran por un mismo régimen, quedase libre en la primera en gerarquía ó importancia; pero como el ministro que suscribe tenía formado el propósito de presentar a V. M. nuevas reformas dentro de un corto plazo, creyó prudente esperar a esta ocasión para la del trigo y la harina.

Ninguna coyuntura, señora, pudiera presentarse mas favorable al efecto que la actual, en que, ademas de las mejoras y reformas de que queda hecho mérito, se propone la franquicia de las hortalizas. Este ramo, en el cual se comprenden las patatas, ha llamado la atención del gobierno, por cuanto es el alimento general del pobre, y por lo mismo ha parecido conveniente liberarlo de todo derecho. Habia, sin embargo, un inconveniente para ello, el cual consistía en el vacío que esta libertad habia de producir en los fondos públicos; y en tal situación el gobierno no ha vacilado, para conciliar los intereses de las clases menos acomodadas con los del tesoro, en imponer al trigo y la harina el derecho común que a las demas poblaciones.

No es posible que en Madrid, pueblo situado en medio de las provincias mas productoras de trigo de España, pueda la escasez ó carestía de granos ocasionar graves privaciones en tiempos ordinarios, con tal que exista la libertad en el tráfico y fabricación que el gobierno de V. M. está decidido a sostener. Una experiencia constante ha venido a confirmarlo, y por lo mismo no parece justo ni conveniente que subsista una excepción contraria a la naturaleza del impuesto sobre los consumos.

Lo mismo se puede afirmar, y con mas motivo todavía, de las capitales y puertos de la tercera escala de la tarifa, respecto a cuyas poblaciones no equivale de seguro el pequeño recargo de 6 maravedises en fanega de trigo, y de 2 en arroba de harina, al gravamen que sufren las hortalizas; y sobre todo, a las vejaciones y quejas que ocasionan los aforos y adeudos. Las capitales de la segunda escala serán las mas favorecidas, pues que no entrando en la idea del gobierno proponer a V. M. recargos sobre otros artículos de consumo, reportarán sin otro gravamen la gran ventaja de las exenciones.

Uniformar la administración de los derechos de puertas, haciéndolos extensivos a las capitales de provincia y a los recintos interiores que no lo han sufrido hasta ahora, es, señora, una medida de rigurosa justicia, reclamada tambien por el principio de la unidad económica-administrativa, objeto especialísimo al cual se dirige el gobierno con perseverante solicitud.

Ninguna razón hay para que las poblaciones referidas disfruten un privilegio que no tienen otras de su misma clase, como Avila, Huelva, Orense y Cáceres, y de que tampoco gozan otras inferiores a ella en categoría, como Cartagena, Gijón y Vigo. Mientras subsistieren las antiguas tarifas con el crecido número de artículos que contenían, puede escusarse por consideraciones de diverso género el retardar que experimentó la nivelación de unas ciudades con otras; pero después de las reformas y exenciones hechas en los dos últimos años, y de las que ahora se proponen, nada podría disculpar la permanencia de tan injusta desigualdad entre poblaciones de un mismo orden.

Finalmente, señora, aunque el gobierno se hallaba bien persuadido de las ventajas que reportará el país con estas reformas, del esmero con que se prepararon y calcularon, y de la conveniencia de su adopción, deseando, sin embargo, asegurarse del acierto, consultó a una comisión revisora, compuesta de un senador, tres diputados a cortes, y de otros altos funcionarios de la administración de la hacienda, cuyo ilustrado y competente dictamen le ha decidido a realizar su pensamiento.

Por las razones expuestas el ministro de hacienda que suscribe, de acuerdo con el consejo de ministros, tiene la honra de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de real decreto.

Madrid 27 de junio de mil ochocientos cincuenta y dos.—Señora.—A. L. R. P. de V. M.—El ministro de hacienda, Juan Bravo Murillo.

Real decreto.

Conformándose con lo que me ha espuesto el ministro de hacienda, de acuerdo con mi consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se declaran libres de derechos y arbitrios de todas clases, las bebidas espirituosas y

las viandas que conduzcan los viajeros y trágneros para su consumo inmediato en el tránsito de unos a otros pueblos, ó para comidas en aquellos en que se detengan a promover negocios, ó por recreo, siempre que la cantidad de especies sea proporcionada a la que cada persona, familia ó personas ó familias reunidas puedan necesitar y consumir en los caminos durante los viajes, y en los puntos de descanso durante un día.

Art. 2.º Ademas de las deducciones y abonos que se conceden a los dueños de depósitos domésticos de líquidos por el art. 32 del real decreto de 23 de mayo de 1845, se deducirá y abonará en lo sucesivo, en el concepto de mermas naturales, un 2 por 100 sobre las cantidades de los mismos líquidos que queden existentes en los depósitos de un año para otro, y sobre las partidas que se estraigan con destino a otros pueblos del reino ó islas adyacentes, siempre que las estracciones se ejecuten en envases de madera ó de barro; entendiéndose que este último abono se habrá de verificar en los puntos donde se introduzcan las especies para el consumo.

Art. 3.º Se reduce a cuatro arrobas el tipo de seis que indistintamente está designado a las especies determinadas de consumo para poderías estraer, libros de derechos y arbitrios, de los depósitos domésticos de cosecheros, fabricantes, especuladores al por mayor, y de los puestos de venta al por menor, en su caso, con destino al consumo de otros pueblos, ó para el exterior del reino.

Igual regla se seguirá con las especies sujetas a la tarifa de derechos de puertas que tengan concedido el beneficio del depósito doméstico.

Se exceptúan los líquidos, para cuyas estracciones con libertad de derechos y arbitrios se reduce el tipo a dos arrobas, siempre que no se verifiquen en corambres, y si en envases de madera, cristal, vidrio ó barro.

Art. 4.º Se suprimen los derechos y arbitrios de todas clases sobre frutos y efectos que se producen, benefician y consuman dentro del caso de las capitales y puertos habilitados, administrados por derechos de puertas.

Art. 5.º Se suprimen igualmente los derechos de puertas con que están gravadas las hortalizas ó verduras, según la clasificación que de ellas hace la tarifa vigente; en la inteligencia de que caducan al mismo tiempo los arbitrios que pesen sobre ellas, y de que no se establecerán en lo sucesivo otros nuevos a la introducción de las especies en las poblaciones, ni en el concepto de consumos.

Art. 6.º Se declaran comprendidas en el régimen común de derecho de puertas, considerándolas en la escala infima de la tarifa, las capitales de provincia que han estado exceptuadas hasta aquí por motivos y circunstancias particulares, y se seguirá igual regla con los recintos interiores de las que no se hallen aun sujetas a lo prescrito en real orden de 13 de febrero de 1849, si bien colocándolas en la escala en que figuran las poblaciones de que formen parte.

Art. 7.º En lugar de los 12 y 28 mrs. que respectivamente pagan por derechos de puerta la arroba de harina de trigo y la fanega de este grano en las poblaciones comprendidas en la escala 3.ª de la tarifa, pagarán 14 mrs. la arroba de harina, y un real la fanega de trigo, como en las poblaciones de la segunda escala.

Al mismo impuesto se someterán las dos especies a su introducción en Madrid.

Art. 8.º Quedan sin efecto los conciertos de derechos que en la actualidad haya ajustados con ayuntamientos, gremios de hortelanos ó con personas particulares por el ramo de hortalizas.

Art. 9.º Los efectos de estas reformas empezarán a regir desde el día 1.º inclusive del mes de agosto próximo.

Art. 10. Quedan derogadas las instrucciones, reglamentos y órdenes vigentes en cuanto se opongan a este real decreto.

Art. 11. El gobierno dará cuenta a las cortes de estas disposiciones para su examen y aprobación.

Dado en Aranjuez a veinte y siete de junio de mil ochocientos cincuenta y dos.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de hacienda, Juan Bravo Murillo.

Exposición a S. M.

Señora: El deplorable error de que el cobre podia sin dificultad hacer las veces de verdadera moneda, y de que admitiéndolo en grandes cantidades se facilitaban a los pueblos así los cambios como el pago de los impuestos, ha dado ocasión a que se acreciente de un modo excesivo la calderilla en el reino, ya legítima, ya clandestinamente.

No son difíciles de señalar los principales resultados a que ha dado margen un empleo tan vicioso de la calderilla, y que hoy ocasionan una perturbación económica monetaria que requiere urgente remedio.

Consisten especialmente aquellos en la estracción del reino de la moneda de oro y plata en cambio de calderilla clandestina que se importa del extranjero, cambio en que se lucran los introductores, pues que lo hacen al crecido valor nominal corriente, y no al intrínseco del cobre, y en el cual pierde el país sumas de consideración, en el engaño que sufren los operarios en la determinación del precio de sus jornales, porque satisfechos estos en cobre no representan en realidad la cantidad de objetos adquiribles que representarían devengados en plata ú oro; en la pérdida que tienen los capitales que son fruto de ahorros hechos en cobre por los jornaleros, cuando estos desean ó necesitan convertirlos en plata ú oro; en la desmoralización y reprobados manejos a que están espuestos los encargados de la recaudación y distribución de los caudales públicos con el tentador lucro que pueden recibir por efecto del agio, supleniendo aceptadas en calderilla cantidades que les fueren entregadas en metales preciosos.

En la prolongación de semejante estado de cosas, nadie, señora, se halla interesado sino los que en él descubren medios seguros de enriquecerse con ganancias tan fáciles como inmorales, las cuales, así como todas las adquisiciones que no reconocen por base el trabajo, si bien aumentan algunas fortunas privadas, lejos de contribuir al acrecentamiento de la pública prosperidad, la comprometen y causan perjuicios de grande trascendencia.

Y si estos males pesan sobre el país de una manera mas ó menos indirecta, gravitan tan directamente sobre las clases mas numerosas y necesitadas del estado, sobre las que requieren por tanto mayor protección y amparo de todo gobierno tutelar, que reclama vivamente un pronto y eficaz remedio.

Será el mas acertado, y deberá de consiguiente adoptarse, aquel que los ataque en sus raíces y fundamentos, desechando todos los que, no basados en los principios que la ciencia económica y la experiencia acreditan de verdaderos, serían ilusorios y acaso de fatales consecuencias en sus aplicaciones y resultados.

Ninguno parece mas procedente, y ninguno es tampoco mas sencillo, que la restitución del cobre a sus verdaderas funciones monetarias, a las que únicamente le permite llenar su naturaliza; esto es, a servir de agente en los cambios con el carácter esclusivo de moneda supletoria, y de consiguiente solo admisible en cortas cantidades.

De esta suerte, cortando el mal en sus causas, desaparecerán naturalmente todas sus consecuencias, y la cuestión de la moneda de cobre, hoy tan erizada de dificultades, se resolverá de un modo definitivo.

Mas para llevar a cabo felizmente esta medida es preciso obrar con circunspección y sin violencia.

Así, será lo mas acertado, que desde un término prudencial se reduzca gradualmente la cantidad de moneda de cobre admisible en cada pago, hasta llegar a una época que deberá fijarse, y a partir de la cual ya no será la calderilla aceptable obligatoriamente en los trocantes, sino en una módica proporción.

En atención, pues, a todo lo espuesto, el que suscribe, de acuerdo con el parecer del consejo de ministros, tiene la honra de proponer a la soberana aprobación de V. M. el siguiente proyecto de real decreto.

Madrid 27 de junio de 1852.—Señora.—A. L. R. P. de V. M.—Juan Bravo Murillo.

Real decreto.

Teniendo en consideración las razones que me ha espuesto el ministro de hacienda, de acuerdo con el parecer de mi consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El estado no dará en sus pagos a los particulares, ni recibirá de estos ni de los estanqueros, receptores y cobradores de rentas y contribuciones públicas, mayor suma en calderilla que el 20 por 100 desde la fecha de este real decreto hasta 31 de diciembre del presente año; 10 por 100 desde 1.º de enero de 1853 hasta 30 de junio del mismo año; 5 por 100 desde 1.º de julio hasta 31 de diciembre de 1853, y 3 por 100 desde 1.º de enero de 1854 hasta 30 de junio del mismo año.

En las provincias donde, por costumbre ó disposiciones especiales, recibe el tesoro la calderilla en proporciones menores que las designadas en este artículo, no se hará novedad hasta la época en que, con arreglo a la presente disposición, quede reducido el tipo a otro inferior al que en la actualidad satisfacen.

Art. 2.º Ni el estado ni los particulares estarán obligados, desde 1.º de julio de 1854 en adelante, a recibir en pago calderilla por valor mayor que el de 300 rs. en las sumas de 10,000 rs. inclusive arriba; de 200 rs. en las que no lleguen a esta cantidad y excedan de 5000 rs.; de 100 rs. desde esta cantidad hasta la de 1000, ambas inclusive; y la décima parte del valor total en las inferiores hasta 20 reales, desde cuya cantidad abajo podrá pagarse el todo en calderilla.

Art. 3.º El gobierno dará cuenta a las cortes de las disposiciones contenidas en el presente decreto para su aprobación.

Dado en Aranjuez a veinte y siete de junio de mil ochocientos cincuenta y dos.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de hacienda, Juan Bravo Murillo.

Exposición a S. M.

Señora: Al proponer en 1.º de abril de 1850 y 31 de diciembre de 1851 las reformas en el impuesto y tarifas de derechos de puertas que V. M. se dignó aprobar por reales decretos de aquellas fechas, tuvo el que suscribe la honra de manifestar que no entraba por entonces en su idea introducir novedad alguna en el ramo de derechos de consumo sobre especies determinadas, espiniendo no obstante a V. M. que la creía provechosa y aun necesaria a la producción, al tráfico y a la generalidad de los contribuyentes; que se ocupaba con asiduidad y empeño de un asunto tan interesante como vital para los pueblos; y que dentro de un corto plazo, presentaría a la soberana aprobación de V. M. otras medidas y franquicias que fuesen compatibles con las atenciones del tesoro público y con las de los pueblos mismos.

Diferentes han sido, señora, los puntos de la contribución de consumos que desde luego se presentaban como motivos incesantes de vejación a los contribuyentes, de entorpecimiento al tráfico, de repugnancia y aun de odiosidad hacia el impuesto, y que reclamaban por tanto ser reformados; pero entre todos, ninguno ha suscitado mayor número de reclamaciones y de justas y sentidas quejas que el referente a la facultad de establecer puestos públicos con la exclusión en la venta al por menor de especies determinadas, y a ninguno por lo mismo ha creído el gobierno que debía aplicar con igual preferencia toda su solicitud.

Autorizada unas veces de antiguo la exclusión, establecida otras sin autorización, y pernicioso siempre en donde quiera que se ha ejercido, es lo cierto que existe en la actualidad como regla de la administración de hacienda, a pesar de los adelantos en la ciencia económica que la condena, y contra la letra y espíritu bien entendido de las leyes.

Es indudable, señora, que el establecimiento del sistema tributario que rige, presidió la idea de que las especies sujetas al derecho de consumos fuesen libres en el tráfico y venta al por mayor y por menor, así en las poblaciones grandes, como en las medianas y pequeñas, sin otras trabas ni restricciones que las precisas para asegurar la recaudación de los derechos; pero tambien lo es que antes de hallarse completa y definitivamente planteado el nuevo impuesto, se le desnaturalizó, vicianándolo en muchas de sus bases y reglas de administración con la facultad de la exclusión.

El real decreto de 23 de mayo de 1845 estableció las reglas que se consideraron suficientes para asegurar la recaudación de los derechos; determinando como medios únicos para realizarlo en el de la administración por cuenta de la hacienda, el arrendamiento y el encabezamiento. Y hasta tal punto se consideraron suficientes estos tres medios para superar todo género de dificultades, que se concedió a los pueblos la facultad de deshuir los cupos de sus encabezamientos, sin poner límite ni restricción de ninguna clase al libre ejercicio de tan importante como trascendental franquicia.

Notable ha sido la muestra de liberalidad con que se halagó a los pueblos al sustituir en ellos con el nuevo impuesto de consumos, limitado a un corto número de especies, el antiguo y mas oneroso de las rentas provinciales, y al concederles la amplitud del libre desistimiento sin el contrapeso y correctivo del estanco; pero si bien la ley hizo tales concesiones creando y fomentando esperanzas ilusorias para los pueblos, y si bien ha hoy motivo para dudar de que el gobierno abrigaba entonces el propósito de no desvirtuar las franquicias ni frustrar las esperanzas, nada de esto se realizó en la práctica en ningún pueblo durante los tres años, ni desde el primer día hasta ahora en los de 2,000 vecinos abajo.

Para asegurar a la hacienda los productos que se calcularon sobre consumos, mientras se verificaba desahogadamente el tránsito del antiguo sistema al nuevo, y se planteaba y consolidaba este, se declaró por una de las disposiciones transitorias de la ley orgánica que fuesen obligatorios los cupos que se designaron a los pueblos para los tres primeros años.

Previsora a todas luces y muy útil fué tal precaución: sin ella, sin el temor al estanco, y con la limitada facultad del desist

plias que las que por la ley se les habían dado para poderlos hacer efectivos de los contribuyentes.

Mas aunque las rebajas se hicieron al poco tiempo por medio de rectificaciones racionales y equitativas, no se calmó la alarma ni cesaron las reclamaciones. Y como el recurso del abasto de especies con la exclusión en la venta al por menor era el mas conocido, el que estaba arraigado desde tiempos antiguos en la costumbre, á él se acogieron las municipalidades, presentándolo y solicitándolo como el mas adecuado y seguro, como el único que les facilitaría la realización de los cupos obligatorios, á la vez que lo que necesitaban para cubrir sus atenciones locales mas pecuniarías.

El gobierno, firme en su primera idea de mantener intactas las bases fundamentales y las reglas administrativas del impuesto, cuya letra y espíritu son contrarias al estanco, y tal vez porque contaba asegurado todavía para dos años valores conocidos, lo cual le daba treguas para esperar con entero desahogo y confianza que aquel se fuese planteando, que los pueblos se acostumbraran á él, y para meditar y proponer á V. M. mas adelante las reformas que creyere necesarias, resistió y se negó á acceder á la exclusión en Setiembre de 1846; pero habiendo reiterado los ayuntamientos sus instancias, y esforzado las oficinas de provincia y la direccion general del ramo el apoyo que desde un principio les prestaron, cedió al fin, aconsejando á V. M. en marzo de 1847 la adopción de aquel método administrativo en beneficio de los ayuntamientos de los pueblos que no escudiesen de tres mil vecinos, ó de los arrendatarios de estos derechos, y reconociendo así la insuficiencia de los tres medios de la instrucción, para que por ellos, y con el solo auxilio de sus demas reglas administrativas, se pudiesen recaudar productos equivalentes á la entidad de los consumos.

No tardaron en sentirse en los pueblos los funestos y deplorables efectos inherentes al estanco, tales como la carestía de las especies, su mala calidad, el entorpecimiento del tráfico, la disminución de los consumos, el daño que de rechazo incesantemente debió sufrir la producción agrícola y fabril, y los disgustos continuos que eran consiguientes, producidos por arrendatarios osados, á quienes patrocinaban acaso personas ó corporaciones encargadas de velar por el cumplimiento exacto de la ley y por el bienestar de los pueblos, y á quienes solo guía por lo común una codicia desordenada, mucho mas cuando en vez de tener á todas horas quien los vigile y contenga, cuentan con la impunidad de sus desmanes, ya que no sea con un mal disimulado y hasta decidido apoyo.

Es probable, sin embargo, que haya habido alguna exageración de muchos pueblos ó contribuyentes, á los cuales, si bien era natural el disgusto, y si sus clamores merecían ser atendidos, no se les ocultaba que el plazo de los cupos obligatorios tocaba á su término, y que sin la exclusión y con la libertad del desahucio les llegaba á su vez la ocasión de imponer la ley de su voluntad á la administración de la hacienda; porque no pudiendo ocultárseles que esta no conseguía nunca recaudar los derechos por sí misma y de su propia cuenta sin gastar acaso una tercera parte, cuando no fuese una mitad, de su importe, ni desconocer tampoco que los arriendos, cuando no los amparasen los ayuntamientos, y no tuviesen los arrendatarios el poderoso auxilio de la exclusión, no llegarían nunca á ofrecerle un resultado equivalente á la importancia de los derechos que se causan, debían prometerse encabezamientos seguros por las cantidades que quisieran pagar.

Conociendo todo esto el gobierno sin duda alguna y justamente temeroso de las inmensas pérdidas que iba á experimentar el tesoro si se practicaba la instrucción en toda su latitud, y si no provia á la administración de armas iguales á las que habían empleado los ayuntamientos, pidió y obtuvo de las Cortes en 1848 la competente autorización para mantener la exclusión, no ya solo en beneficio de aquellas corporaciones ó de sus arrendatarios, sino también de la hacienda y de los de esta; reduciéndola empero á los pueblos que no llegasen á 2000 vecinos.

Desde entonces acá, señora, se ejerce aquel método administrativo como regla general de hacienda, pues que á pesar de la reducción del vecindario, no llegan á 3 por 100 las poblaciones exceptuadas, y desde entonces tambien han ido aumentando los clamores de los contribuyentes, cada día mas vejados y oprimidos por las estorsiones y violencias que les hacen sufrir los arrendatarios, siendo tal el número de reclamaciones, y tan grande y general el descontento que se advierte, que si no se adopta pronto una disposición que corte de raíz la causa que lo produce, degenerará en odiosidad incontestable hacia el impuesto, dificultando sobremanera su conservación.

Si hubiera seguridad de que los pueblos se presinasen á la celebración de encabezamientos razonables, ninguna necesidad habria de sustituir por otros medios el gran vacío que ha de dejar la falta de la exclusión para la hacienda y los partícipes; pero no debiendo contarse nunca con lo que no está en la naturaleza de las cosas, y no debiendo tampoco esponer al tesoro á quebrantos irreparables, que no bajarán por de pronto de una cuarta parte de los productos, y á la larga de una tercera parte, cuando menos, ó de una mitad acaso, es de todo punto indispensable arbitrar un recurso que supla al del estanco, y que no tenga los graves inconvenientes de este método, insostenible ya como regla general de hacienda por lo vejatorio y desacreditado.

El único que hay, á juicio del ministro que suscribe, ó si no el único, el mas conocido fácil de plantear, y menos ocasionado á todo género de inconvenientes, es, señora, el de los cupos obligatorios concedidos á los pueblos de corto vecindario, en los cuales la administración de los derechos por cuenta de la hacienda, ni los arriendos alcanzan á llenar todos los fines de la ley del impuesto.

Si no fuesen conocidos por datos seguros, los pueblos, sus circunstancias, los medios de posibilidad que tienen con relacion al consumo y los que emplean para hacer efectivos sus actuales cupos de encabezamiento, cuyo resultado es ventajoso por regla general, ó si la reforma que se propone se apartara de estas bases, pudieran tacharse los cupos de obligatorios, de arbitrarios y exagerados, y se daría ocasión á quejas y reclamaciones; pero cuando el gobierno debe lo primero y se halla muy distante de obrar en contradicción con lo segundo, no habrá arbitrariedad ni exageración, ni se dará motivo fundado ni aun pretesto siquiera á las reclamaciones y quejas.

Aunque la primera vista parezca que se desnaturaliza la imposición, convirtiéndose de indirecta y de rendimientos eventuales que es, en directa y de cuota fija, no sucederá así en realidad: 1.º, porque los derechos continuarán exigiéndose á los contribuyentes sobre los consumos de especies que verifiquen, sin que á estos consumos y á los productos que rindan su carácter de eventuales; 2.º, porque no serán permanentes los cupos sino por tres años cuando mas, y por lo mismo transitorios, pues que el gobierno no teme aventurarse á ofrecer desde luego que hará por su parte cuanto esté á su alcance para que dentro del trienio, ó antes tal vez, desaparezcan los cupos forzados, la exclusión, aun considerada como excepción de las reglas administrativas de hacienda, y todo lo demás que se oponga al planteamiento definitivo del impuesto, bajo las bases y condiciones genuinas de su verdadera índole; y 3.º, porque nunca se ha considerado tan absolutamente indirecto el de consumos que no haya sufrido alteraciones muy esenciales, toda vez que desde un principio, además de los cupos obligatorios, designados sin datos tan completos y seguros como los que en la actualidad existen, se permitió á los pueblos que se encabezasen con la hacienda la facultad de optar por el repartimiento con preferencia á los encabezamientos ó concertos parciales de los derechos de cada ramo con los cosecheros, fabricantes ó tratantes de él, al arrendamiento total de los derechos ó los parciales de cada especie, y á la administración por cuenta de los pueblos mismos.

Y aunque la exclusión, considerada como regla general de administración de hacienda, no admita

defensa ni pueda sostenerse en buenos principios de economía, tendrá excusa en algunos casos como excepción de las reglas administrativas, siempre que los pueblos mismos la soliciten y ejerzan como medio indispensable de asegurar para las clases pobres el surtido de especies á precios razonables, y sobre todo, restringiéndola y moderándola en términos que no pueda abusarse de ella con perjuicio de la producción, del tráfico, del consumo y de la moralidad. Bajo estos conceptos únicamente cedió el gobierno que debe aconsejar á V. M. la continuación temporal del estanco, por vía de transición y en beneficio de los pueblos que no escadan de 500 vecinos, ó de los arrendatarios de los derechos de consumo, sujetándolo aun así á una instrucción particular.

De manera, que si bien esta reforma no es tan radical y completa como fuera de desear, y como el gobierno se propone realizarla dentro del plazo de los tres años, no deja de ser notable el paso que se da hacia el planteamiento definitivo del impuesto sobre las bases y condiciones peculiares á su índole, al suprimir el monopolio en las ventas al por menor de las especies gravadas, respecto á las poblaciones que cuentan de 500 á 2000 vecinos, y al regularizarlo y restringirlo en las de 500 vecinos abajo.

Y si por otra parte se considera que viniendo aumentándose los productos de año en año en sumas bastante respetables, sin distinción de pueblos, y pudiendo por tanto la hacienda aspirar á utilizarse de los aumentos correspondientes á los que no escaden de 500 vecinos, con solo mantener en ellos el monopolio, como regla de su administración, no lo quiere sin embargo, y renuncia espontáneamente á semejantes ventajas en beneficio particular de las mismas poblaciones y del país en general, resaltarán á todas luces la equidad con que se procede en no exigir por cupos obligatorios mayores cantidades que las que se pagan en el año corriente ó en el común del último trienio, y resultará de todos modos que no habrá motivo fundado á reclamaciones.

Por último, señora, á pesar de hallarse penetrado el gobierno de que el medio escogido para suflir en parte al de la exclusión no tiene en realidad tantos inconvenientes como los inseparables de este último método; considerando la gravedad y trascendencia de la reforma, creyó oportuno aconsejar de personas competentes en materia de impuestos y de administración, y propuso á V. M. la creación de una junta, compuesta de un senador, tres diputados á Cortes y de otros altos funcionarios de la hacienda, los cuales con presencia de antecedentes examinaron los trabajos, haciendo observaciones luminosas y útiles, de que el gobierno se ha aprovechado, y le decidieron á llevar adelante su pensamiento con entera confianza.

En atención á las razones espuestas, el ministro que suscribe, de acuerdo con el consejo de ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de real decreto.

Madrid 27 de junio de 1852.—Señora.—A. L. R. P. de V. M.—Juan Bravo Murillo.

Real decreto.

Conformándose con lo que me ha espuesto el ministro de hacienda, de acuerdo con mi consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Queda abolida, como regla de administración de la hacienda, la facultad de establecer puestos públicos con la exclusión en la venta al por menor de las especies sujetas al impuesto de consumos.

Art. 2.º En lo sucesivo solo podrán usar de la espresada facultad, como excepción de las reglas generales administrativas, los ayuntamientos de los pueblos que no escadan de 500 vecinos, ó los arrendatarios de las mismas corporaciones, en los casos, con las restricciones y previas las formalidades que se determinen por la instrucción particular formada al efecto y aprobada por mí en esta fecha.

Art. 3.º Las instancias que hagan los ayuntamientos pidiendo la facultad de establecer la exclusión para la venta al por menor de una ó mas especies, se dirigirán á los gobernadores de las provincias, y estos, oyendo antes á una comisión compuesta de un diputado provincial elegido por la diputación, de un consejero provincial nombrado por los mismos gobernadores, y del administrador y un inspector de contribuciones indirectas, resolverán lo que corresponda con arreglo á instrucción.

Art. 4.º Se considerarán encabezados con la hacienda por los derechos de consumo los pueblos que no escadan de 500 vecinos, entendiéndose obligatorios para tres años los cupos que hayan de satisfacer.

Art. 5.º El importe de los cupos obligatorios será el de los productos que los mismos pueblos rinden al tesoro en el año actual por encabezamiento ó por arriendo, ó el que hayan rendido en el año común del último trienio, teniendo en cuenta para el aumento que corresponda, las reformas hechas por real orden de 31 de diciembre de 1851 y real decreto de 31 del mismo mes y año sobre adeudos por los consumos que verifiquen las tripulaciones de buques en puertos y bahías, y sobre carnes frescas, particularmente de ganado de cerda.

Art. 6.º Los pueblos que tengan mas de 500 vecinos continuarán rigiéndose por los medios de administración, encabezamiento ó arriendo en la forma prescrita por las instrucciones y órdenes generales vigentes.

Art. 7.º Sin perjuicio de la regla general que se establece en el art. 4.º sobre encabezamientos de los pueblos que no escadan de 500 vecinos, subsistirán en toda su fuerza y vigor por los plazos que se hallen estipulados, los contratos de arriendo que la hacienda tenga celebrados por derecho de consumo en pueblos de aquella clase.

Art. 8.º Los efectos de estas reformas empezarán á regir desde el día 1.º de enero inclusive del año próximo de 1853, aun cuando los contratos de encabezamiento ó de arriendo existentes tengan señalados plazos mas largos.

Art. 9.º Quedan derogadas las instrucciones, reglamentos y órdenes que se hallan vigentes en la actualidad en cuanto se opongan á este real decreto.

Art. 10.º El gobierno dará cuenta á las Cortes de estas disposiciones para su examen y aprobación.

Dado en Aranjuez á veinte y siete de junio de mil ochocientos cincuenta y dos.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de hacienda, Juan Bravo Murillo.

INSTRUCCION QUE S. M. la reina se ha dignado aprobar en real decreto de esta fecha estableciendo reglas sobre los casos en que será permitida la exclusión en la venta al por menor de las especies determinadas de consumos, y sobre el modo de usarla.

Artículo 1.º Será permitido el establecimiento de puestos públicos con la venta exclusiva al por menor de las especies sujetas al impuesto de consumos en los pueblos que no escadan de 500 vecinos.

Art. 2.º Para que los ayuntamientos ó los arrendatarios de los derechos de consumo puedan usar de la facultad de la exclusión, precederá siempre el que las mismas corporaciones, asociadas de un número de vecinos igual al de sus individuos, ó duplo, si lo hubiere, que representen la propiedad, el comercio, la industria y las clases menesterosas, lo acuerden así como recurso conveniente para que en ninguna época del año falte el surtido necesario de especies.

Art. 3.º Precederá asimismo la fijación de premios á las especies por unidades de cuartillo ó libra, y por las equivalentes que correspondan del sistema métrico decimal de pesos y medidas, para cuya operación se tendrán precisamente en cuenta: 1.º, el valor de las especies en los puntos de su producción, procedencia ó primera compra; 2.º, el gasto del transporte; 3.º, el quebranto natural por razones de mermas, derrames y pérdidas; 4.º, el costo de vendaje; y 5.º, el importe de los derechos y arbitrios.

Art. 4.º No podrán llevarse á efecto los acuerdos de los ayuntamientos sobre uso de la exclusión sin que sean aprobados por los gobernadores de las

provincias en los términos prevenidos en real decreto de esta fecha, para lo cual les remitirán los mismos ayuntamientos copia autorizada del acta de la sesión ó sesiones que hubieren producido dichos acuerdos, y una certificación expedida en debida forma del señalamiento de precios á que se hayan de vender las especies al por menor.

Art. 5.º Los gobernadores de las provincias, previos los informes y noticias que crean oportuno adquirir para asegurarse de que conviene á los pueblos la exclusión respecto á algunas ó á todas las especies sobre que la pidan y sea permitida usarla, y de que el señalamiento de precios se haya hecho con estricta sujeción á lo prescrito en el art. 3.º, concederán, negarán ó limitarán el uso de aquel medio.

Art. 6.º Será libre la venta al por mayor de las especies sujetas al impuesto de consumos, con la sola obligación de satisfacer al ayuntamiento ó á quien le subroge en sus acciones y facultades, por las que se ejecuten para el consumo del mismo pueblo, lo que corresponda por derechos de tarifa y arbitrios de todas clases.

Art. 7.º No se permitirá el uso de la exclusión á los pueblos cosecheros sobre los vinos, aceite, chacolí y sidra, ni á los que tengan fabricas de aguardientes, licores, cerveza y jabón, siempre que los productos de las cosechas y fabricas basten para satisfacer las necesidades del consumo local. El vinagre seguirá siempre la misma suerte que los vinos, chacolí y sidra.

Art. 8.º Tampoco se permitirá sobre las mismas especies á los pueblos que, aunque no tengan cosechas ni fabricas, se hallen situados á corta distancia de los puntos productores; á saber, á los que disten siete leguas estando situados sobre caminos generales, y á los que disten cinco desde los provinciales ó vecinales.

Art. 9.º Las reglas contenidas en los dos artículos precedentes, se aplicarán á los pueblos que se dedican á la cría y matanza de ganado de cerda y á la industria de la salazon de estas carnes en grande escala para extraerlas con destino al consumo de otros pueblos.

Art. 10.º El uso de la exclusión se concretará en todo caso á las poblaciones y al radio exterior de ellas hasta la distancia de dos mil varas castellanas, ó lo equivalente en metros lineales, contados desde la última casa de las agrupadas.

Art. 11.º Los paradores, posadas, casas de labranza ó recreo, y las ventas que se hallen fuera de dicho radio, podrán consumir y vender libremente todas las especies, sin mas obligaciones que las comunes y ordinarias que prescribe el real decreto de 23 de mayo de 1845 para asegurar la recaudación de los derechos y arbitrios.

Madrid 27 de junio de 1852.—Bravo Murillo.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Real orden.

Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. de 26 del corriente solicitando una resolución del gobierno acerca de la manera mas conveniente de aprovechar y hacer uso de las leñas de los montes inmediatos á la línea del canal de Isabel II, en beneficio de las obras del mismo, para que no sufran retraso en la ejecución:

Vista la ley de 17 de julio de 1836 para la enagenación forzosa de la propiedad particular en beneficio público:

Vistos los artículos 30 y 31 de la instrucción de 10 de octubre de 1845 para promover y ejecutar las obras públicas que facilitan la constitución de las servidumbres necesarias en beneficio de las mismas, y preveniendo las maneras y formas en que ha de verificarse la indemnización de daños y perjuicios:

Considerando que media una grande diferencia entre la espropiación y la constitución de servidumbre, diferencia nacida de la diversa intensidad de sus efectos, pues por la primera se espulsa al dueño de su propiedad, y por la segunda, sin privarle de ella, se le impone tan solamente cierto gravamen durante cierto tiempo, y que por consiguiente no debe recurrirse á la espropiación cuando baste con la constitución de una servidumbre, y sea esta aun mas ventajosa á los intereses de la administración:

Considerando que en el caso de que se trata la constitución de las servidumbres necesarias á la ejecución de las obras, y por tanto la de leñas, está facultada por los artículos 30 y 31 ya citados de la instrucción de 10 de octubre de 1845:

Considerando que dicha servidumbre de leñas en los montes contiguos á la línea del canal es de incontestable necesidad para la mas pronta terminación de las obras:

Considerando que el canal de Isabel II está declarado obra de utilidad pública, y que de consiguiente le comprenden y corresponden todos los beneficios que las disposiciones vigentes señalan á las de esta naturaleza:

La reina se ha servido prevenirme diga á V. E., que puede manifestar desde luego al ingeniero director de las obras del canal de Isabel II, que se halla facultado para constituir las servidumbres de leñas que le sean precisas para la prosecución de los trabajos de las obras en los montes contiguos á la línea del canal, bien pertenezcan á bienes de propios, ó bien sean de particulares, mediante la correspondiente indemnización; debiendo tener entendido que, según las disposiciones vigentes, las indemnizaciones y rescates de montes de daños y perjuicios ocasionados por las obras públicas, solo podrán solicitarse ante el gobernador respectivo, ventilándose el asunto, en el caso en que se hiciese contencioso por no convenirse las partes, ante el consejo provincial.

De real orden lo comunico á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1852.—Bravo Murillo.—Señor presidente del canal de Isabel II.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Negociado central.

S. M. la reina (Q. D. G.) se ha dignado resolver que durante la ausencia de D. Felipe Mauriceo Andriani, jefe de la contabilidad general de este ministerio, se encargue interinamente del negociado desde 1.º de julio próximo al oficial segundo D. Félix Martín Romero. Madrid 28 de junio de 1852.—Reynoso.

GUARDA-COSTAS.

La escampavía *Favorita*, de la primera division, apresó sobre los bajos del río Guadarrama el día 21 del actual una barquilla con siete tercios de tabaco.

CORREO ESTRANJERO.

FRANCIA.

Los periódicos de París son del 26. El cuerpo legislativo seguía ocupándose de la discusión de los presupuestos. La comisión ha abandonado casi todas las reducciones que hasta ahora había insistido en sostener, á pesar de la opinion del consejo de estado, á excepción del capítulo 25 del presupuesto de lo interior. La comisión había propuesto una rebaja de 400,000 francos en este capítulo: el consejo de estado no la había admitido; entonces la comisión propuso que se desechase todo el capítulo, y la asamblea se adhirió á esta opinion. Pero esta votación no es definitiva, lo mismo que la que tuvo lugar sobre el capítulo 12 de la deuda pública, relativo á las dotaciones del senado.

Segun la constitución, los capítulos así desechados deben volver al consejo de estado que delibera de nuevo; luego vuelven otra vez al cuerpo legislativo; y si cada uno de estos cuerpos insisten en su manera de ver, el presidente resuelve la dificultad, convocando por parte del senado un senado consulto que permita pasar á otra cosa, á pesar de la resolución del cuerpo legislativo. Pero no es probable que en el caso actual haya que recurrir á esa medida estre-

ma, y que llegarán á entenderse el cuerpo legislativo y el consejo de estado.

Fuera de la discusión del presupuesto, las noticias políticas de Francia carecen de interés. Solamente hablan algunos periódicos de la disolución del consejo municipal de Tolosa y de la causa que la ha promovido, que segun parece fué las cuestiones acaloradas que tuvieron lugar en una de las sesiones del consejo, en que se trataba de hacer una invitación al presidente de la república á que visitase la ciudad y del presupuesto de gastos para las fiestas que habían de celebrarse con este motivo.

PORTUGAL.

Segun las noticias que recibimos de este reino, la comisión de la cámara de los pares había dado un informe favorable sobre la revision de ciertos artículos de la carta, enmendados por la cámara de diputados, agregando á ella un artículo aboliendo la pena de muerte por delitos políticos.

Los ultra-liberales continúan sus ataques contra el ministro de lo interior, Sr. Magalhães; cuarenta anuncios de interpelaciones se habían hecho ya en la cámara.

ALEMANIA.

En Bremen continúan las prisiones á consecuencia del descubrimiento de la conspiración llamada *de la muerte*. El 22 de este mes prendió la policía á un librero llamado Meyer, el cual en la asamblea de ciudadanos disuelta, en la que ejerció el cargo de archivero, pertenecía á la extrema izquierda.

A aquella misma fecha seguía en Bremen el comisario federal, general Jacobs.

ITALIA.

Segun escriben de Roma con fecha 20 de este mes á un periódico de París, preocupaba la atención pública la tentativa de envenenamiento que había tenido lugar en el palacio de la embajada francesa, dando motivo á interpretaciones tan diversas como inexactas. El lunes 14 por la mañana, en el momento mismo en que Mme. de Rayneval se disponía á salir, se observó en la cocina que la leche que se estaba calentando tenía un color y un aspecto extraordinario; se concibieron sospechas, se previno al conde de Rayneval, y este rogó al médico del ejército, doctor Meyer, que se hallaba á la sazón en la embajada, analizase la sustancia así adulterada. El doctor creyó que el medio mas expedito por el momento era dársela á beber á un gato que se encontraba allí, y el animal, después de haber bebido algunas gotas, fué acometido de vértigos y murió al momento.

Se arrestó en seguida á un criado que se había visto rondar pocos momentos antes por las inmediaciones de la cocina, y del cual se tenían ya algunas sospechas. Parece que este hombre deseaba ocupar un puesto mas elevado en la casa, y que esperaba suceder al titular, muerto hacia poco tiempo, y que no lo había conseguido. Atribuyendo su desgracia á la doncella de la embajadora, había resuelto vengarse de la manera que se acaba de ver, echando arsénico en la leche que se preparaba para el desayuno. El color sospechoso de esta sustancia había descubierto el crimen; pero si se hubiese echado el veneno en el café, por ejemplo, las consecuencias hubieran podido ser funestas.

CORREO DE ESPAÑA.

Como creemos que todas las noticias sobre ferrocarriles son de grande interés, publicamos á continuación las que relativas al de Santander á Alar, inserta el *Despertador Montañés* llegado anoche:

«Principiados ya los trabajos del camino de hierro en el trozo que arranca de esta ciudad, y debiendo procederse á otros en mayor escala desde Alar á Reinosa, creemos seria muy conveniente el aumento de la guardia civil en los puntos de la línea donde mas lo exigiese la concurrencia de operarios, así para mantener el orden entre ellos, como para protegerlos, si necesario fuese. Sabemos que nuestro digno comandante general ha adoptado en este sentido las convenientes disposiciones, como que dicha autoridad, en su línea, contribuye no menos que las civiles, por cuantos medios están en su mano, á la mas pronta ejecución de las obras del camino en que tan interesado se halla el país.

El 21 del actual salió para Alar Mr. Philip Sewell, representante de la compañía inglesa, á señalar los trozos del camino por donde han de principiarse los trabajos de esplanación, á fin de que puedan ser contratados inmediatamente. El 23 regresó á esta capital cumplido ya el objeto de su viaje.

El Sr. D. Calixto Santa Cruz salió tambien de esta ciudad el día 23 para situarse en Pesquera y atender á los estudios de la direccion del camino por la cuenca del Besaya, interin el Sr. Torres Vildósola se ocupa de los suyos por el Escudo y valle de Toranzo, conforme á las instrucciones que le ha comunicado aquel digno jefe del distrito é inspector facultativo de las obras del ferrocarril.

La celosa diputación provincial de Zamora, una de las primeras que se prestaron á contribuir para la construcción del ferrocarril de Isabel II, ha aumentado últimamente cuarenta acciones mas al respetable número por que se había suscrito. No podemos dejar de aplaudir un acto que tanto honor hace á los patrióticos sentimientos de esta corporación.

No es menos digno de elogio el desprendimiento del señor marqués de Valbuena, quien ha cedido en favor de la empresa del ferrocarril la cantidad de 6000 rs. vn., procedente de terrenos que se le han ocupado para el establecimiento de la línea.

Como modelo que debiera ser imitado por las corporaciones municipales, y con especialidad por las que se hallan mas directamente interesadas en la construcción del ferrocarril, citaremos tambien al ayuntamiento constitucional de Reinosa, el cual, además de haberse suscrito por 34 acciones, ha ofrecido tomar en estas el valor de los terrenos de propiedad particular que en aquel distrito ocupe la vía, y ceder gratuitamente los públicos ó érgidos comunes.

Abrazamos la esperanza de ver repetidos estos ejemplares, atendidas las excelentes disposiciones que se notan en los particulares y en las autoridades locales, para secundar con rasgos de generosidad semejantes los desinteresados esfuerzos de la junta concesionaria.

Sabemos que los constructores del ferrocarril tratan de arrendar el monasterio de Mave, con objeto de alojarse en la inmediación de las obras. Al efecto se ha ofrecido á la junta delegada de Palencia, para que alcance del Ilmo. señor obispo de aquella diócesis el correspondiente arrendamiento. El Sr. D. Bruno Aparicio de Guzman, magistrado de esta santa iglesia catedral, y uno de los diputados por dicha junta para el acto de la inauguración, ha interpuesto tambien sus buenas relaciones para obtener la licencia de aquel reverendísimo prelado, mostrando en cuantas ocasiones se ofrecen su esmerado celo por los intereses de la empresa. A fuer de justos y agradecidos, no podemos dejar sin mencion los servicios de este digno eclesiástico.

Las muchas é importantes cuestiones que llaman con preferencia la atención de la junta concesionaria del ferrocarril, no la impiden, sin embargo, el ocuparse de otros asuntos, indiferentes para el público si se quiere, pero que prueban su prevision en todo y su incansable laboriosidad. Decimos esto, porque segun tenemos entendido, trata, mientras en la misma estación no se prepara un local mas á propósito para el

establecimiento de sus oficinas, de amueblar el actual sin lujo, pero con la decencia que corresponde. En el salon destinado para celebrar las sesiones se colocará el retrato de S. M., honor debido siempre á nuestra idolatrada soberana, y con doble motivo por parte de una empresa, distinguida por su reina con tan insignes favores y honrada con su augusto nombre.

Comisión nombrada para representar en Madrid á la concesionaria del ferrocarril de Isabel II.

Una de las primeras y mas acertadas disposiciones que deben adoptarse en provincias, cuando se trata de llevar á cabo algun gran proyecto de interés comunal con el apoyo y cooperación del gobierno de S. M., es sin duda el nombramiento de una comisión especial que pasando á la corte, practique todos los pasos que se crean necesarios y estén á su alcance, para el pronto y feliz despacho de cuanto dependa de la superior resolución del mismo gobierno. Convencida la celosa junta directiva de nuestro ferrocarril, de la utilidad de semejante medida, que tan buenos resultados ha producido generalmente á las localidades que la han puesto en práctica, no podía prescindir de adoptarla tambien por su parte, como oportunamente lo han hecho con satisfacción suya y de cuantos se interesan en la prosperidad de la empresa. Y no siendo posible distraer á ningún individuo de su seno de las árduas y penosas tareas á que actualmente se hallan consagrados, ha procedido al nombramiento de una comisión, compuesta de personas residentes en la corte, y que á la circunstancia de ser naturales de este país ó descendientes del mismo, reúnen otras no menos indispensables para el buen desempeño de su cometido, como son su acreditado celo, actividad, ilustración é influjo en las altas regiones del poder. Creemos sumamente acertado este nombramiento, y que la junta lo habrá sido igualmente en la designación de las personas. Tampoco dudamos de que los señores que componen la comisión aceptarán la honrosa confianza de la junta, satisfaciendo al mismo tiempo los ardientes deseos que siempre han manifestado de contribuir por su parte á la prosperidad de este país, con el cual se hallan estrechamente ligados, y cuyo porvenir, á fuer de hijos generosos, jamás podrán serles indiferente.

Comisión del ferrocarril de Isabel II de Santander á Alar del Rey.

El señor marqués de Valbuena ha tenido la generosidad de condonar en favor de la empresa del ferrocarril, seis mil reales del importe en que estaban tasados los terrenos de su pertenencia que ha de ocupar la línea en el barrio de Cajo.

Esta comisión ha acordado darle las gracias y que se publique este rasgo en el presente periódico. Santander 23 de junio de 1852.—El presidente interino, Cornelio Escalante.—Jacobo Jusé, vocal secretario.

El 26 del pasado tuvo lugar en Salamanca la segunda reunion de la diputación provincial, con objeto de acordar los recursos con que podía cooperar á la realización del camino de hierro del Norte; habiéndose convenido ofrecer al gobierno con destino á la línea por la direccion marcada, ó sea por Avila, Arévalo y Valladolid, ocho millones de los once en que están valuados los bienes de propios, reservándose la venta de todos ellos para la construcción del ramal que debe enlazar á dicha ciudad con Arévalo.

Segun vemos en el *Barcelonés*, la empresa del canal de riego de Urgel toca á su término; todas las acciones se han emitido ya, y dos dias hace que no se admiten pedidos; hasta un 2 1/2 y 3 por 100 se ofrece por cada accion que se conceda. El total de las acciones que se hallan emitidas asciende á 16,000, y segun parece, pasan de muchos miles las pedidas, á mas de las que la sociedad tenía para emitir.

Tambien, segun anuncia el *Sol*, se trabaja con mucha actividad en la carretera de Esparraguera á Monistrol de Monserrat, la cual se espera que estará concluida para el otoño; siendo la verdadera importancia de esta comunicación llevarla hasta Manresa, una de las ciudades mas importantes del principado; proyecto que nuestro colega espera ver realizado antes de un año.

De Villareal escriben con fecha del 26 á uno de nuestros colegas lo siguiente acerca del ferrocarril de Valencia á Murviedro:

«Si no estamos mal informados, las proposiciones hechas al concesionario del ferrocarril de Valencia á Murviedro, consisten en el ofrecimiento de tomar acciones por valor de 9,000,000 de reales, las cuales se distribuirán entre los pueblos de la provincia, pudiendo estos optar luego por el repartimiento de su importe ó por la venta de bienes de propios para suplirle por este medio. No hay por qué decir que esto último nos parece lo mas beneficioso.

Hace unos dias que pasó por esta, con direccion á Segorbe, el señor gobernador civil de la provincia. Suponemos que su viaje habrá sido motivado por el choque habido entre los recaudadores de los derechos de consumos y los vecinos de aquella ciudad, ó tal vez por la muerte del alcalde de uno de los pueblos inmediatos. Como tanto aquella como esta desgracia no tienen ningun roce con la política, escusamos hacer el menor comentario sobre la visita de S. S.

La industria minera es por lo visto la que debe tomar un notable incremento con las rápidas vías de comunicación que se proyectan. Segun parece, pasan de ciento las denuncias de nuevas minas presentadas en los tres últimos dias en el gobierno de la provincia de Córdoba, con motivo de las fundadas esperanzas de ver pronto cruzados nuestros pueblos por ferrocarriles.

Durante una parte de la mañana del 25 se oyeron en Málaga disparos de cañón á larga distancia por la parte del mar. Segun se decía, los hacia la escuadra inglesa del Mediterráneo, que debe hallarse en aquellas aguas, y que al parecer ha podido divisarse, aunque muy lejos. Créese que se presentará á la vista de aquí pronto.

Con referencia á cartas de Mallorca se aseguraba tambien el 15 en Barcelona que la escuadra francesa que últimamente se hallaba en las costas de Argelia, debía pasar dentro de poco á las Baleares.

De Cervera escriben al *Sol* con fecha del 23, la carta que á continuación copiamos:

«Conforme en que el carlismo es imposible, y abundando en la opinion de V. que en el caso de

